



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, junio 16 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-**002-2013-00123-02**
Demandantes HÉCTOR ALONSO GIRALDO SANTANA
Demandados EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU”
Asunto: CONTRATO REALIDAD

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, la que se profiere de forma escrita atendiendo las reglas de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

A través de la acción judicial, pretende el actor se declare la existencia de una relación laboral con la entidad accionada con ocurrencia entre el 30 de diciembre de 2004 y el 30 de abril de 2011, la que aduce se ocultó bajo la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios, donde no se reconocieron las prestaciones sociales, ni beneficios laborales, los que reclama al igual que la indemnización por despido sin justa causa, la reparación total y ordinaria de

perjuicios por daños materiales y morales y la indemnización por falta de pago en los términos de la Ley 797 de 1945.

En respuesta a la acción la entidad se opuso a la totalidad de pretensiones señalando que la vinculación del actor lo fue como contratista para la ejecución de diversos convenios inter-administrativos que se suscribieron en favor del Municipio de Medellín, sin que haya lugar al pago de los conceptos reclamados.

En sentencia que desató la primera instancia, El A quo reiterando que la litis se trabó entre el accionante y la Empresa para la Seguridad Urbana, al margen de las eventuales responsabilidades solidarias con el beneficiario de las labores ejecutadas y tras aludir al postulado de primacía de la realidad sobre las formas, halló acreditados los elementos constitutivos de una relación laboral, en tanto el señor Giraldo Santana realizaba funciones bajo estrictas órdenes y lineamientos de la accionada, debía rendir informes, solicitar autorización para ausentarse sin que pudiera predicar autonomía en su ejecución, por el contrario él portaba uniforme, carnet, coordinaba la labor de defensores de espacio público los que no eran elegidos por este, sino también contratados por esta accionada.

Así las cosas, estableció que la ESU actuó como verdadero empleador, con quien se configuraron dos relaciones de naturaleza laboral entre el 30/12/2004 al 14/03/2005 y entre el 23/06/2007 al 30/04/2011 la que terminó sin justa causa, de donde fueron afectados con la prescripción extintiva aquellas prestaciones previas al 3 de julio de 2009, salvo las cesantías del segundo periodo laboral, por lo que procedió a tasar las prestaciones.

En cuanto a las vacaciones y prima de vacaciones un total de \$1'204.626 por cada uno. Prima de navidad \$3'405.600; Cesantías: 6'414.545, intereses a las cesantías: \$769.745, cotizaciones al sistema de salud: \$1'358.400, cotizaciones en pensiones \$2'241.445, aportes ARL \$817.800 e indemnización por despido sin justa causa: \$6'359.760. valores que habrán de reconocerse indexados.

Absolvió de las súplicas referente a los descuentos por retención en la fuente, indemnización moratoria y daños morales y materiales, el primero porque se trata de un asunto de naturaleza fiscal, el segundo item en tanto no se halló demostrado un actuar de mala fe y respecto a la reparación por culpa patronal al no existir elementos de prueba que establezcan que hubo una responsabilidad objetiva del empleador.

Inconforme con la decisión fue recurrida por ambas partes así:

La activa consideró que la condena por cesantías es superior al monto declarado por el A quo en tanto para su cuantificación conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, debe incluirse la 1/12 parte de la prima de navidad y de vacaciones, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó el 3 julio de 2012, y en consecuencia los intereses a las cesantías habrán de aumentarse. También pretenden se verifique el cálculo de las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad los que estima son superiores a los montos declarados.

Pretende se revise lo atinente a la sanción moratoria la que a su juicio debe concederse estando plenamente probada la temeridad con la que actúo la accionada en tanto acudió a una contratación temporal para cubrir funciones permanentes, que no obedecieron a labores técnicas, científicas o que no pudieran cubrirse con personal de planta, valiéndose de contratos que enuncia como de prestación de servicios pero incluyen típicas obligaciones de una relación laboral subordinada y sin que sea válido alegar desconocimiento de la ley ya que se trata de una entidad con suficiente asesoría jurídica, y frente a la cual se han emitido múltiples decisiones en la Sala casación Laboral de la CSJ.

Refiere que hay lugar a la devolución del concepto retención en la fuente, al margen que se trate de temas tributarios, en tanto al haberse originado en una verdadera relación laboral, es un asunto que debe resolverse por el Juez del trabajo.

A su turno, la ESU insistió en la negación de existencia de la relación laboral, aduciendo que no se demostró que la prestación del servicio fuera en favor de la accionada, entidad que tiene como objeto el apoyo logístico y seguridad urbana y que no se ocupa de la protección del espacio público, función esta del Municipio de Medellín a través de la Sub -Secretaría de Espacio Público de Medellín, develando que la ESU actuó como intermediario que suscribió el contrato pero no lo fue en favor de esta entidad, por tanto se configuraría la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que daría lugar a la absolución de las pretensiones.

ALEGATOS

Concedido el término establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la activa presentó escrito en el cual reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

Previo al análisis, en el presente evento resulta relevante poner de presente que se encuentra por fuera de discusión que: **1)** Héctor Alonso Giraldo Santana se desempeñó como coordinador de espacio público, siendo vinculado por la Empresa para la Seguridad Urbana, vínculo con ocurrencia entre 30/12/2004 y el 14/03/2005 y del 23/06/2007 al 30/04/201130 conclusión a la que arribó el fallador de instancia conforme a la documental adosada al trámite y que no fue discutida por las partes; **2)** tampoco se cuestiona que la presente litis se trabó entre el actor y la ESU a quien la activa señala como empleador, por tanto no es del caso analizar las posibles delegaciones de responsabilidad que se derivarían de las eventuales condenas a cargo de entes o sujetos no vinculados a este trámite;**3)** se hace claridad que las referencias a la Empresa Metropolitana de Seguridad – Metroseguridad, tienen efectos para la persona jurídica acá accionada, en tanto aquella, siendo una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal a través del Acuerdo 33 de septiembre 9 de 2010 cambió su nombre a Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, cuyos empleados tienen la categoría de

trabajadores oficiales, salvo algunos cargos como el gerente, secretario general, el jefe de control interno y el tesorero (artículo 16 Decreto 178 de 2002 por el cual se modificaron los estatutos de Metroseguridad) información extraída de los documentos de folios 135/147.

Así las cosas, atendiendo a los aspectos objeto de apelación habrá de establecerse si la prestación personal del servicio de Héctor Alonso Giraldo Santana comportó una relación de naturaleza laboral.

En el presente evento y dada la naturaleza jurídica de la entidad accionada habrá de remitirse a los artículos 1 y 2 Decreto 2127 de 1945 que refieren que para que exista un contrato de trabajo, se requieren tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Y de acuerdo con el artículo 3 ibídem, probada la prestación personal del servicio, nace la presunción de existencia de un contrato de trabajo, al margen de la denominación que se le dé o las condiciones de remuneración.

Relación laboral que no es ajena a las situaciones de prestación del servicio en favor de un tercero, lo que no resta el carácter de empleador a quien, valiéndose de sus propios medios y con autonomía, se comprometa a realizar una labor en beneficio ajeno a cambio de un precio determinado, lo que no obsta para que se desprendan responsabilidades solidarias para el beneficiario de la labor (artículo 6 Decreto 2127 de 1945).

Conforme a los elementos de defensa del presente trámite, donde la pasiva sostiene que la relación de las partes fue de naturaleza civil a través de un contrato de prestación de servicios, conviene indicar que de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte ha establecido que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios es la subordinación del trabajador respecto del empleador, entendida como la posibilidad que tiene el empleador de

ejercer control y vigilancia sobre las labores del trabajador, imponiendo órdenes que deben ser cumplidas por el subordinado; en contraste el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante. Siendo entonces la subordinación el elemento diferenciador, su prueba está a cargo de aquel que niega la existencia de la relación laboral.

Se trata pues de una situación que debe ser analizada en cada caso concreto, sin que exista una tarifa legal o compendio de conductas que deban demostrarse para derruir la presunción a través de la prueba de la falta de subordinación, pues no todos los eventos objeto de debate presentan un panorama diáfano de subordinación como aquella que se ejerce bajo el ambiente de una fábrica, en tanto la realidad presenta múltiples formas de prestación de servicios.

Para estos eventos de zonas dudosas, a juicio de la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha de acudirse a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, que a modo enunciativo referencia conductas que generan indicios de existencia de una relación laboral, entre ellos la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona, la disponibilidad del trabajador, la aplicación de sanciones disciplinarias, el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo, realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el beneficiario del servicio, el suministro de herramientas y materiales, así como el carácter de esencial de la labor prestada para el contratante.

Bajo estas premisas se descende al **caso concreto**, y estando probada la prestación del servicio con unos extremos definidos y no discutidos por las partes (30/12/2004 a 14/03/2005 y 23/06/2007 a 30/04/2011) encuentra la Sala que, tras verificarse el material probatorio la accionada **no logró derruir la presunción** de existencia de una relación laboral, a través de la demostración de una relación exenta de subordinación, así:

A folios 148/227 aparecen diversos contratos interadministrativos suscritos entre el Municipio de Medellín y Metroseguridad entregándole a esta entidad “el desarrollo de programas y estrategias para la defensa y control del espacio público, en aras de recuperar el centro y el entorno de la ciudad de Medellín de ventas ambulantes” (objeto del contrato) el que habría de cumplirse siguiendo las estrategias diseñadas por la Secretaría de Gobierno, estableciendo para ello una retribución.

Entre los folios 27/62 aparecen los diferentes contratos suscritos por el señor Giraldo Santana los que pese a enunciarse como de prestación de servicios de carácter civil de cara a la Ley 80 de 1993, dan cuenta de típicas obligaciones de subordinación tales como presentar informes diarios antes sus líderes, asistencia permanente a los lugares asignados por la entidad so pena de reducir su retribución y servir como coordinador de otros ciudadanos que ejercían la función de cuidado del espacio público.

Adicional fue escuchado el testigo LUIS ALFONSO RESTREPO GÓMEZ quien como defensor de espacio público entre los años 2005 a 2014, señaló que Héctor Alonso era coordinador por tanto tenía a su cargo a un grupo de defensores y eventualmente estuvo bajo sus direcciones. Refirió que Héctor debía porta un uniforme, cumplir un horario y prestar el servicio en un lugar determinado previamente, ya que él no podía elegir el lugar y jornada de trabajo como tampoco ausentarse o designar un reemplazo, debiendo además presentar informes diarios de las tareas desarrolladas, además de asistir a charlas de capacitación.

En cuanto a la vinculación refirió que esta era realizada por la ESU, con quien se suscribía el contrato, de esta recibían el pago, además que los jefes y coordinadores también eran contratados por la ESU, salvo el Sub Secretario de espacio público, quien era un funcionario del Municipio de Medellín.

En cuanto a la intervención del Municipio de Medellín, indicó que eventualmente y con ocasión de festividades como navidad y feria de flores recibían oficios para realizar operativos, en cuanto al uniforme que portaban especificó que los logos eran alusivos al Municipio de Medellín y que los elementos confiscados con ocasión de la labor del mantenimiento del espacio público eran llevados a una bodega nominada “polo norte” propiedad del ente municipal.

Son estas las pruebas adosadas, las que valoradas conjuntamente y de cara al postulado de la libre formación del convencimiento, generan en esta corporación certeza sobre la existencia de una relación de naturaleza laboral, donde se desplegaron conductas de subordinación; el actor participaba de una cadena de actividades subordinadas en tanto él coordinaba un equipo de defensores de espacio público, pero a su vez él estaba sometido a las directrices de aquellos con superior jerarquía.

Se revela que si bien se trató de una actividad de interés general y de atribución estatal cual es la defensa del espacio público, ello no desnaturalizó el rol que cumplió la ESU como empleador, quien tras aceptar los diferentes contratos interadministrativos y recibir la remuneración pactada, se apersonó de la ejecución de programas de defensa del espacio público, siendo entonces una función propia a sus quehacer y que al tener una duración significativa como en este caso que lo fue por espacio superior a 6 años, no se trata de una actividad accidental frente a la cual pretenda minimizar sus responsabilidades, desconociendo derechos de aquellos que prestaron su fuerza de trabajo y por tanto causaron no solo una retribución mensual, pero además todos los derechos de índole laboral conforme a la categoría de trabajadores oficiales, atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad contratante.

Ahora bien, atendiendo a las súplicas de la activa referentes a la cuantificación de las acreencias laborales procede la corporación a su verificación, partiendo de

algunos aspectos que no fueron debatidos, a saber: el monto de la remuneración por cada anualidad, y la extinción de los derechos causados con anterioridad al 3 de julio de 2009, salvo lo referente al auxilio de cesantías de la segunda vinculación laboral. así:

Año	Salario
2007	\$ 1.166.000
2008	\$ 1.458.000
2009	\$ 1.485.000
2010	\$ 1.485.000
2011	\$ 1.306.800

VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES – ARTÍCULOS 8 A 31 DECRETO 1045 DE 1978

Prestaciones que equivalen a 15 días de salario por cada año de servicio o proporcional. Se destaca que estas prestaciones se causan una vez transcurre un año de servicio, las que podrán ser concedidas “*dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas*” y respecto a la prima de vacaciones lo será “*dentro de los cinco días hábiles anteriores a la fecha señalada para la iniciación del descanso remunerado*”. (artículos 12 y 28 Decreto 1045 de 1978), por tanto es dable entender que el término de prescripción es de 4 años, al respecto la Sala de Casación Laboral de la CSJ sentencia SL 1538 de 2022:

“En cuanto a la compensación por vacaciones, el artículo 187 del CST consagra que el empleador tiene un año para concederlas, es decir, que antes de ese tiempo el trabajador no puede reclamar dicho descanso remunerado; esto es, en estricto rigor, que este se hace exigible un año después de causado, y esa es la fecha que se toma como referencia para determinar la prescripción.

Dicho de otro modo, como los tres años de prescripción se contabilizan desde la exigibilidad del derecho, en el caso de las vacaciones este medio exceptivo se alcanza luego de cuatro años de causadas...”

Así las cosas, estas se liquidan teniendo como hito prescriptivo el 3 de julio de 2008 y tomando como referencia para la causación la fecha de ingreso al servicio (23/06/2007) por lo que corresponde a los siguientes valores:

Año	Salario	N° días	vacaciones	prima de vacaciones
2007	\$ 1.166.000	-	-	Prescritas
2008	\$ 1.458.000	354	\$ 707.030	\$ 707.030
2009	\$ 1.485.000	365	\$ 742.500	\$ 742.500
2010	\$ 1.485.000	365	\$ 742.500	\$ 742.500
2011	\$ 1.306.800	311	\$ 556.733	\$ 556.733
TOTAL			\$ 2.748.763	\$ 2.748.763

PRIMA DE NAVIDAD- ARTÍCULOS 32 Y 33 DECRETO 1045 DE 1978

Correspondiente a un mes de salario por cada año de servicio o en proporción por doceavas por cada mes completo de servicio. Como factor salarial se integra para el caso concreto la porción de la prima de vacaciones. Calculada esta prestación desde el 3 de julio de 2009 corresponde a los siguientes valores:

Año	N° doceavas por cada mes completo	Salario básico	Prima de vacaciones (doceava)	Salario + prima	Valor doceava	Sub total
2007		\$ 1.166.000	\$ 48.583	\$ 1.214.583	\$ 101.215	PRESCRITAS
2008		\$ 1.458.000	\$ 61.875	\$ 1.519.875	\$ 126.656	
2009	5	\$ 1.485.000	\$ 61.875	\$ 1.546.875	\$ 128.906	\$ 644.531
2010	12	\$ 1.485.000	\$ 61.875	\$ 1.546.875	\$ 128.906	\$ 1.546.875
2011	4	\$ 1.306.800	\$ 54.052	\$ 1.360.852	\$ 113.404	\$ 453.617
TOTAL						\$ 2.645.023

AUXILIO DE CESANTÍAS ARTÍCULO 17 LEY 6° DE 1945 Y ARTÍCULO 45 DECRETO 1045 DE 1978.

Correspondiente un mes de sueldo por cada año de servicio y para el presente evento se computan como factores salariales las porciones de las primas de navidad y de vacaciones (se toman como doceava en tanto son prestaciones de remuneración anual y por tanto se toma su representación mensual) de donde al

calcular la generada en el vínculo con ocurrencia entre el 23/06/2007 y el30/04/2011 corresponde a:

Año	Días de servicio	Asignación básica	Doceava prima vacaciones	Doceava prima navidad	Sumatoria factores	Sub total
2007	191	\$ 1.166.000	\$ 48.583	\$ 101.215	\$ 1.315.799	\$ 688.541
2008	365	\$ 1.458.000	\$ 61.875	\$ 126.656	\$ 1.646.531	\$ 1.646.531
2009	365	\$ 1.485.000	\$ 61.875	\$ 128.906	\$ 1.675.781	\$ 1.675.781
2010	365	\$ 1.485.000	\$ 61.875	\$ 128.906	\$ 1.675.781	\$ 1.675.781
2011	119	\$ 1.306.800	\$ 54.052	\$ 113.404	\$ 1.474.256	\$ 480.648
TOTAL						\$ 6.167.283

INTERESES A LAS CESANTÍAS

Regulados en la Ley 50 de 1990 aplicable a los empleados oficiales vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 en los términos del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, por tanto corresponde a 12% anual o proporcional, que se consigna antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación. Se trata de una prestación generada cada año lo que hace que su exigibilidad y por tanto los términos de prescripción sean independientes a las cesantías, en este caso, solo harán de reconocerse aquellas causadas con posterioridad al 3 de julio de 2009 y corresponden a los siguientes valores:

Año	N° días de servicio	Cesantías	Porcentaje	Sub total
2007	PRESCRITAS			
2008				
2009	181	\$ 1.675.781	6,03	\$ 101.050
2010	365	\$ 1.675.781	12	\$ 201.094
2011	119	\$ 480.648	4	\$ 19.226
TOTAL				\$ 321.369

En lo atinente a la **devolución de retención en la fuente**, a la misma no hay lugar en tanto tales valores fueron trasladados al ente tributario nacional, por tanto cualquier reclamación habrá de adelantarse contra esta, siendo este el criterio pacífico sostenido por la Sala de Casación Laboral de la CSJ; a modo de ejemplo la sentencia SL 2197 de 2021:

“Devolución de retención en la fuente

La Sala no accederá a la pretensión en razón que, así hubiesen sido acreditados debidamente las deducciones efectuadas a la demandante por este concepto, esta Sala ha enseñado que el reclamo de las sumas retenidas en la fuente por el ISS entregadas a la DIAN, debe adelantarse ante dicha entidad y por vía diferente al trámite procesal ordinario de carácter laboral (CSJ SL2973-2018).

Relativo a la **sanción moratoria de la Ley 797 de 1949**. Comporta un reproche frente al actuar del empleador que de forma **injustificada** omite el pago de salarios y prestaciones sociales, misma que no opera de forma automática, sino que es necesario verificar la conducta del empleador y concluir si estuvo enmarcada o no en los postulados de la buena fe, como aquel proceder leal, honesto y con apego a las reglas.

Sobre el asunto resulta relevante traer a colación lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la CSJ decisión SL 1406 de 2022, donde luego de realizar un rastreo por las pruebas recaudadas concluye:

La empresa demandada ESU sometió a la actora a su subordinación jurídica en lo que respecta a la ejecución de la labor para la que fue vinculada, pues, los diferentes contratos de prestación de servicios demuestran que, desde el inicio del convenio, la empleadora conocía que la demandante tendría que estar disponible a fin de cumplir «las demás actividades que le sean asignadas por el Subsecretario Defensoría del Espacio Público». Esta estipulación muestra, de una parte, no solo la sujeción a órdenes de quien tuviera que desempeñar el referido cargo, pues las funciones o actividades no dependían de ella como supuesta contratista, sino de quien se las asignara.

De otra parte, también acredita que la demandada conocía que la actora no tenía autonomía administrativa o técnica, pues la actividad asignada tenía que ejecutarse con los bienes de propiedad de la ESU.

De esa manera, el supuesto convencimiento de encontrarse frente a un contrato de naturaleza diferente al laboral luce insostenible en la medida

que, desde que inició dicha relación, la empleadora conoció que estaría determinada por la subordinación jurídica al pactarse el sometimiento a las funciones que le fueran asignadas y que la labor se tendría que realizar con los bienes de la empresa contratante. Por manera que, amparar su buena fe en que tenía la creencia de que el contrato respetaba la autonomía de la actora según las previsiones de la Ley 80 de 1993, no luce razonable.

La anterior conclusión se refuerza con los estatutos de la ESU, los cuales establecieron que el personal vinculado con dicha entidad tendría el carácter de trabajador oficial, salvo quienes ejercieran labores de dirección, confianza o manejo, categoría que no ostentó la demandante, luego, el pretendido desconocimiento de su condición de trabajadora oficial carece de fundamento, y, además, contraviene los postulados de la buena fe.

Criterio interpretativo de relevancia para el caso concreto, donde de cara a las estipulaciones de los diferentes contratos y la narración fáctica del testigo Luis Alfonso Restrepo quedó acreditado que la ESU impuso al actor típicos actos de subordinación como cumplir un horario y lugar de prestación de servicio, rendir informes diarios, portar uniforme, donde se reconoce una línea de autoridad respecto a otros empleados, sin que sea válido excusarse en la ejecución de una labor temporal y delegada por el Municipio de Medellín, en tanto se trató de una actividad que en el presente evento se demostró realizarse por más de 6 años, lo que devela que la entidad tuvo la oportunidad de verificar la legalidad de la modalidad contractual elegida y ajustarla conforme a la regulación.

Así las cosas, se impone la sanción la que surge una vez vencido el término de gracia para el pago de acreencias laborales (90 días desde la terminación de la relación laboral), esto es desde el 1° de agosto de 2011, liquidado con el último salario diario que lo fue de \$43.560. indemnización que cesa una vez se verifique el pago de los derechos laborales.

Resta por indicar que se confirma la condena en costas en primera instancia y dado el sentido de la presente decisión, donde no se accedió de forma total a las súplicas de los apelantes, no se condena en costas.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, decide:

MODIFICA EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia solo en lo referente a la cuantificación de las siguientes prestaciones:

Vacaciones:	\$2'748.763
Prima de vacaciones:	\$2'748.763
Prima de navidad:	\$2'645.023
Cesantías:	\$6'167.283
Intereses a las cesantías:	\$321.369

Sumas que serán pagadas con la debida indexación. Los demás conceptos se mantiene la decisión del fallador de instancia.

REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA en el sentido de condenar a la Empresa para la seguridad Urbana a reconocer a Héctor Alonso Giraldo Santana a reconocer la indemnización por falta de pago de acreencias laborales en los términos de la Ley 797 de 1949, la que corre desde el 1° de agosto de 2011 hasta la satisfacción de las condenas, a razón de \$43.560 diarios.

Costas en primera instancia como indicó el fallador de instancia, sin costas en esta instancia en tanto no se demostraron de forma total los argumentos de disenso de

las partes.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

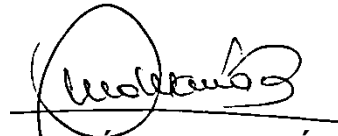
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Sin firma por ausencia justificada

MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-002-2013-00123-02
Demandante: HÉCTOR ALONSO GIRALDO SANTANA
Demandado: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU
Decisión: MODIFICA Y REVOCA PARCIALMENTE
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO